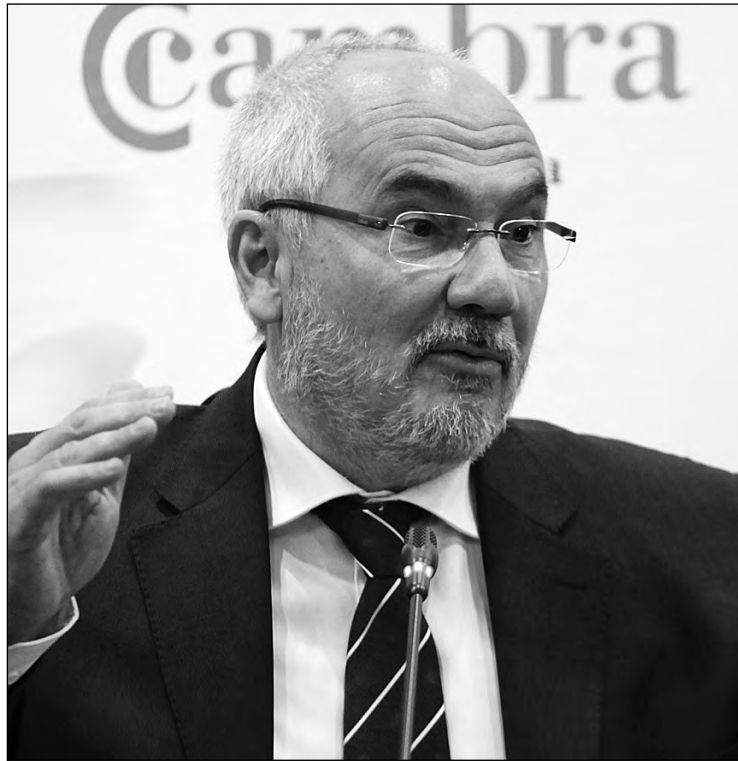


FINANZAS



Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya entre 2005 y 2010. EP



Adolf Todó, director general de Caixa Catalunya entre 2008 y 2010 y presidente de Catalunya Caixa entre 2011 y 2013. EP

Después de Bankia, llega el turno de Catalunya Caixa (CX). Anticorrupción busca bajo la alfombra cualquier indicio de operación irregular en la entidad entre los años 2004 y 2007, cuando quien la presidía era Narcís Serra. La investigación no se refiere a una operación concreta, como en el caso de la Caja madrileña, sino al sistema

de concesiones de créditos sin garantías que se practicó en la entidad catalana durante aquellos años, antes de la fusión. El importe de estas operaciones supera los 900 millones de euros y engloba a cientos de hipotecas individuales y préstamos fallidos a promotores y constructores, algunos de ellos conocidos.

En el informe del FROB hay compras de suelo con sobreprecio y préstamos fallidos a conocidos constructores catalanes

Catalunya Caixa, un polvorín

■ Esmeralda Gayán

Que nadie busque tarjetas opacas entre los directivos y consejeros de **Catalunya Caixa (CX)**. Según el ministro de Economía, no las hubo o, al menos, no tiene constancia de ellas. "De haberlas, el Gobierno las habría destapado hace tiempo, para compensar el escándalo de Bankia", señalan fuentes jurídicas.

En el caso de la entidad catalana, lo que analiza el **Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)**, organismo que depende de Economía, es la práctica de concesión de créditos de forma "alegre" entre los años 2004 y 2007, cuando quienes gobernaba Catalunya Caixa eran **Narcís Serra**, exministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno de **Felipe González**.

Para evitar las filtraciones que se

produjeron por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, el organismo ha decidido esta vez hacer públicos algunos detalles.

Se sabe por ejemplo que se trata de 16 operaciones que provocaron un perjuicio económico de 900 millones de euros. También es público que esta política de concesión de préstamos ha provocado que algunas de estas carteras tengan tasas de mora "injustificables, muy superiores a la media en algunos casos, y, además, se han llevado a cabo refinanciaciones por encima del 70%", ha dicho el propio **Luis de Guindos**.

Lo que todavía se desconoce es a quién se concedieron dichos créditos. Fuentes conocedoras de la antigua Caja catalana vinculan los préstamos que estarían siendo objeto de análisis por la **Fiscalía Anti-**

corrupción a operaciones realizadas antes de 2010. "Los solicitantes del crédito eran empresas o promotores inmobiliarios medianos o grandes. Se trata de préstamos para la compra de inmuebles o bien refinanciaciones empresariales que se aprobaron sin criterios razonables. Se regalaron, ya que en su mayoría constan como impagados", explican estas fuentes.

En otras palabras, la entidad pre-

El empresario catalán Felip Massot, socio de la Caja al 50% en la sociedad Vertex Procam, compraba supuestamente terrenos a precios inflados y con las plusvalías levantaba promociones

sidida por Serra otorgaba, presuntamente, créditos sin comprobar técnicamente las posibilidades de impago del cliente de la Caja. Como resultado, la concesión o cancelación de estos créditos tuvo un perjuicio para la entidad, que acabó siendo rescatada con 14.000 millones de dinero público.

Empresarios "amigos"

Uno de los nombres que aparecen en el informe de auditoría forense en manos de Anticorrupción es el del constructor catalán **Felip Massot**, empresario muy próximo a **Convergència y Unió (CiU)** y según fuentes extraoficiales, amigo personal de **Artur Mas**, presidente de la Generalitat.

De acuerdo con el informe que el Fondo dependiente del Gobierno encargó a **Ernst&Young**, la Caja

catalana habría perdido mucho dinero en varias operaciones inmobiliarias cerradas en el año 2007 con este empresario, con el que la Caja compartía desde 1992 la sociedad **Vertex Procam S.L.** al 50%, siendo Vertex el grupo inmobiliario del constructor y Procam, la promotora de Caixa Catalunya.

Una de estas tres operaciones es la compra de unos terrenos donde se ubicaba la fábrica de **La Seda**, en Barcelona. Vertex Procam acordó un precio de 50 millones de euros el 10 de mayo de 2007, mientras que la tasación que se encargó en diciembre de ese mismo año fue de sólo 38 millones. Supuestamente, quien vendía los terrenos era otra empresa del mismo Felip Massot, que con las plusvalías obtenía financiación para hacer las promociones, como dueño de la mitad de la sociedad que adquiriría las parcelas.

Y es que en muchas de las operaciones investigadas, la Caja entraba en juego como parte de su negocio, con sociedades conjuntas, en proporciones diversas desde el 30 al 50%.

En ese momento las tasaciones que se hacían eran elevadas, y en muchas ocasiones el contratista aportaba además de la garantía hipotecaria una garantía personal. Pero cuando el mercado inmobiliario estalló, la Caja catalana asumía las promociones a cambio del impago y, como consecuencia, terminaba asumiendo pérdidas importantes.

La irregularidad de estas operaciones no sólo estaría en el precio, sino también en el proceso de concesión de dichos créditos, ya que los terrenos, supuestamente, se adquirieron sin la "necesaria" autorización del Consejo de Administración. El proceso era el siguiente: la sociedad inmobiliaria acometía las inversiones y luego informaba al órgano de gobierno de la entidad.

Según fuentes jurídicas hubo más operaciones de este tipo, si bien todavía no han trascendido los nombres. "Son empresarios afines, la mayoría de ellos catalanes cuyos nombres posiblemente salgan pronto a la luz", aseguran.

Hipotecas masivas

Además de los créditos a promotores y constructores sin criterios económicos, la Fiscalía también analiza otro tipo de operaciones en la Caja que presidía el exministro socialista. Se trata de la conocida como **cartera Hércules**, que englobaba operaciones pequeñas, básicamente préstamos hipotecarios individuales que los analistas de la entidad consideraban que tenían alto peligro de quiebra o "riesgo subestándar". Esta cartera sumaría casi 38.000 casos y un volumen de 6.392 millones de euros.

Este paquete de hipotecas se vendió al fondo **Blackstone** en el proceso previo a la privatización de Catalunya Caixa. El precio de venta fue de 3.615 millones. Con este dinero se compraron las hipotecas y locales que había en garantía, que en libros tenían un valor de 4.187 millones a lo que se sumaron las provisiones de 2.205 millones de la propia entidad y una aportación del FROB de 572 millones.

Todas estas prácticas supusieron pérdidas importantes para la Caja catalana. Parece claro que la entidad, por tanto, concedió créditos e hipotecas con escasos criterios técnicos. Ahora, lo que investiga el organismo que preside **Fernando Restoy** es "si hubo o no hubo relación de criterios, y cuál fue el coste para el contribuyente, puesto que Catalunya Banc, en términos relativos, ha recibido más ayudas que Bankia", explican fuentes del organismo público.

Narcís Serra, en el punto de mira de Anticorrupción

■ La Fiscalía Anticorrupción le tiene ganas a **Narcís Serra**, expresidente de **Catalunya Caixa**. El que fuera vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa con **Felipe González** fue denunciado por este organismo hace un año, junto al ex director general de la entidad, **Adolf Todó**, así como otros 52 miembros del Consejo por aprobar aumentos retributivos pese a la "situación crítica" de la entidad. En 2005 fue nombrado

presidente de Caixa Catalunya y el 28 de agosto de 2010 se anunció que antes de la fusión de la entidad con las cajas de Manresa y Tarragona se había subido el sueldo, a pesar de encontrarse la entidad intervenida por el FROB y en plena crisis económica. El duro escrito de la Fiscalía denunciaba entonces que los exdirectivos abusaron de su cargo, y que "utilizaron fondos de una entidad con connotaciones y

trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad". Pero por ahora, ni la Fiscalía ni la justicia han podido condenar a Serra ni a ningún directivo de la antigua Caja. Más bien al contrario. **El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)** ha confirmado una sentencia que obliga a Catalunya Banc a pagar 1,2 millones en concepto de indemnización por despido a Todó y al exconsejero delegado **Jaume Masana**. Una

sentencia que el FROB ya ha anunciado que recurrirá. Pero si no puede ser por los salarios, el FROB está dispuesto a perseguir a Serra y su equipo por su gestión. El propio **Luis de Guindos** ha anunciado que bajo su mando no sólo va a seguir llevando a la Fiscalía operaciones irregulares concretas como hasta ahora, sino también, modelos de gestión. Así, el FROB ha enviado a la Fiscalía a Serra y a su equipo entre los años

2004 y 2007 por presunto delito de administración desleal por la concesión de préstamos sin tener en cuenta la evaluación de riesgos. Y es que en el Partido Popular le tienen ganas a Serra. El vicepresidente socialista en tiempos de Felipe sería un trofeo perfecto para demostrar que la corrupción no sólo afectó a las Cajas de ahorros gobernadas por los populares, como **Bankia**, las gallegas o las valencianas, sino también a las Cajas catalanas.